

EJERCICIO DE DEVOLUCIÓN

SEGUNDO AÑO DE TRABAJO



observatorio nacional de paz



UNIÓN EUROPEA

CORPORACION DERECHOS
PARA LA PAZ

CONTRATO
DCI-NSAPVD
/2010/232-042



observatorio nacional de paz

EJERCICIO DE DEVOLUCION

SEGUNDO AÑO DE TRABAJO



observatorio nacional de paz

COOPERACION EUROPEA
PARA LA PAZ
CONTRATO
DCI-NSAPVD
/2010/232-042



observatorio nacional de paz



PLANETA PAZ



Corambiente
Corporación Buen Ambiente



LA GOTERA
Red de Centros de Tratamiento de Aguas



Fundación Terra & Espanza

Esta publicación ha sido producida gracias al apoyo de
la Unión Europea,
El Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega,
y La Fundación Hanns Seidel Stiftung,
Bajo los términos y acuerdos de colaboración.

Las opiniones expresadas por los autores
no necesariamente refleja el punto de vista
de estos gobiernos y agencias de cooperación.

*“Ejercicio de devolución:
Segundo año de trabajo - Observatorio Nacional de Paz”*

Observatorio Nacional de Paz
www.observapaz.org

ISBN: 978-958-57727-1-7
Noviembre 2012

Planeta Paz
Calle 30 A N. 6-22 Of. 2701
PBX (57-1) 3402300
Bogotá D.C. - Colombia
planetap@planetapaz.org
www.planetapaz.org

Diseño: Laura Contreras

Algunos íconos están publicados bajo licencia Creative Commons
tomados de: <http://thenounproject.com>

Impresión : Ediciones Antropos / www.edicionesantropos.com
PBX (57-1) 4337701

Apoyado por:





PRESENTACIÓN

La reorganización territorial que se ha venido experimentando en Colombia en la última década constituye en un eje analítico fundamental para explicar las configuraciones recientes del régimen político y del modelo económico del país. En efecto, las transformaciones espaciales –material y social- que se han gestado tanto en el mundo urbano como en el rural han generado cambios significativos en las redes de relaciones sociales y de poder –económicas y políticas- en todo el territorio nacional.

Un elemento importante que ha acompañado la definición de esta nueva configuración territorial está asociado con la emergencia de un número importante de conflictos en los territorios objetos de dicha reorganización. Los impactos que han acompañado la nueva manera de planear y ordenar el territorio por parte del Estado, los grupos económicos –nacionales e internacionales-, e incluso los actores armados, ha entrado en tensión con la manera como las comunidades geo-grafían sus territorios. Esto es la manera, como ellas apropián material, social y simbólicamente su espacio.

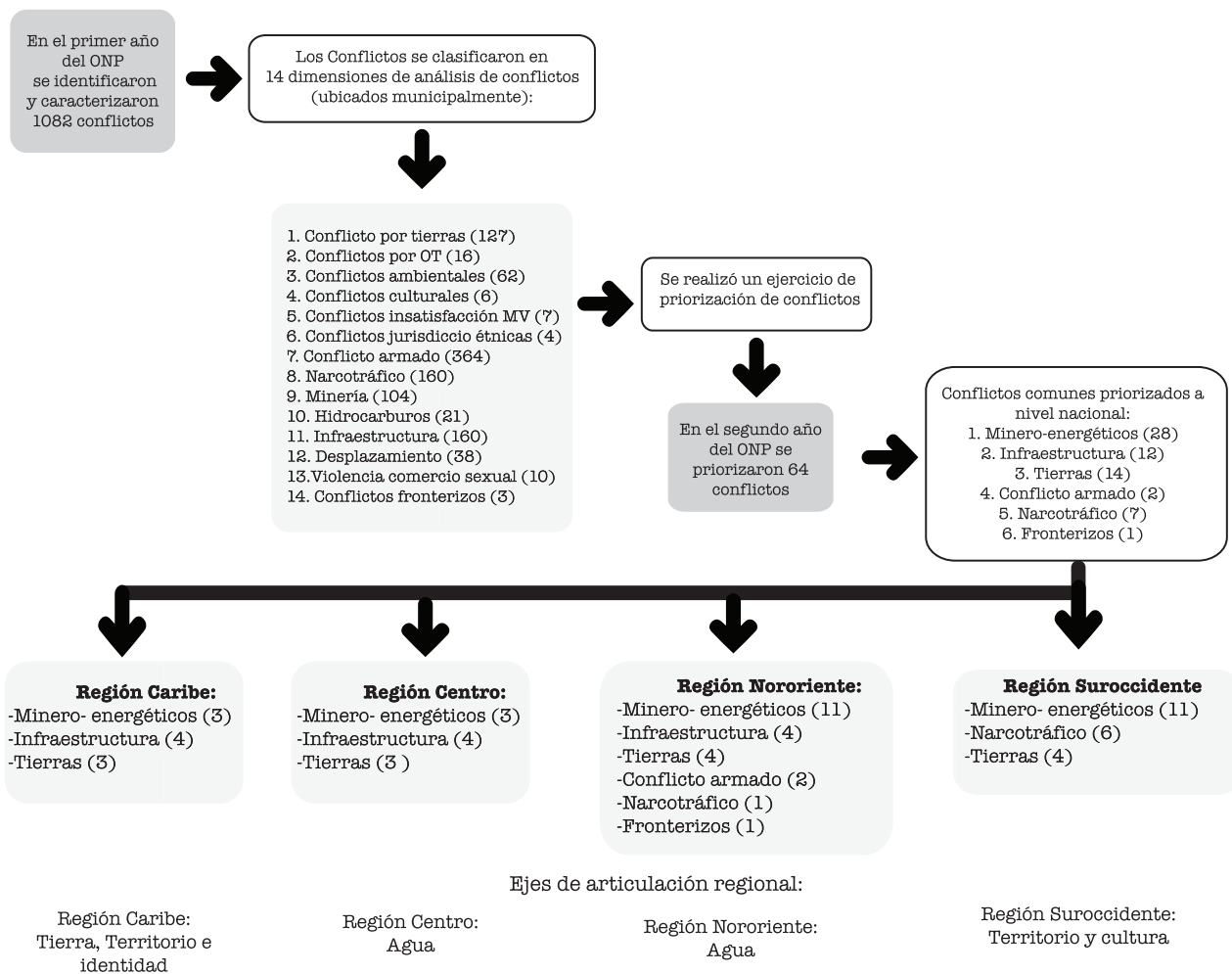
La tensión de territorialidades que ha emergido de cara a este reordenamiento espacial se constituye en un factor explicativo de buena parte de los conflictos que hoy se surten en el país. En efecto, la geografía de los conflictos sociales permite ver que el mundo de lo popular se levanta en la lucha por la defensa de un territorio que hoy es objeto de valoración y apropiación por parte de un grupo significativo de actores económicos, políticos y armados.

El trabajo realizado en el Observatorio Nacional de Paz –ONP- con 319 organizaciones sociales populares del país ha permitido avanzar en un ejercicio de identificación, caracterización y priorización de los conflictos. Durante el primer año se identificaron 1.082 conflictos que se clasificaron en torno a 14 dimensiones de análisis¹, posteriormente durante el segundo año se realizó un ejercicio de priorización nacional que arrojó un total de 64 conflictos priorizados a nivel nacional. En el siguiente gráfico se puede apreciar el diagrama del proceso identificación y priorización de conflictos del ONP.

1 Las dimensiones expresan la manera como las organizaciones propusieron un ejercicio de categorización y análisis de sus conflictos.



Diagrama de conflictos del proceso del Observatorio Nacional de Paz



Como se puede apreciar en la gráfica, las caras de la conflictividad del país involucran una multiplicidad de elementos que los hacen altamente complejos. En efecto, se encuentran conflictos que van desde el problema por la tenencia de la tierra y los usos del suelo, hasta aquellos asociados con precarización de las condiciones de vida de las comunidades, desarrollo infraestructural, violencia y comercio sexual, e impacto ambiental de ciertas prácticas económicas en los territorios. En este sentido, caracterizaciones tradicionales de los conflictos que pretendían circunscribirlos en uno de los campos sociales, esto es políticos, económicos, sociales, culturales, deja por fuera los cruces que entre estos campos se establece y que asumen una configuración muy particular de acuerdo a las comunidades, los territorios y los procesos de resistencia que en ellos se desarrollen.



DINÁMICA DE LA CONFLICTIVIDAD REGIONAL

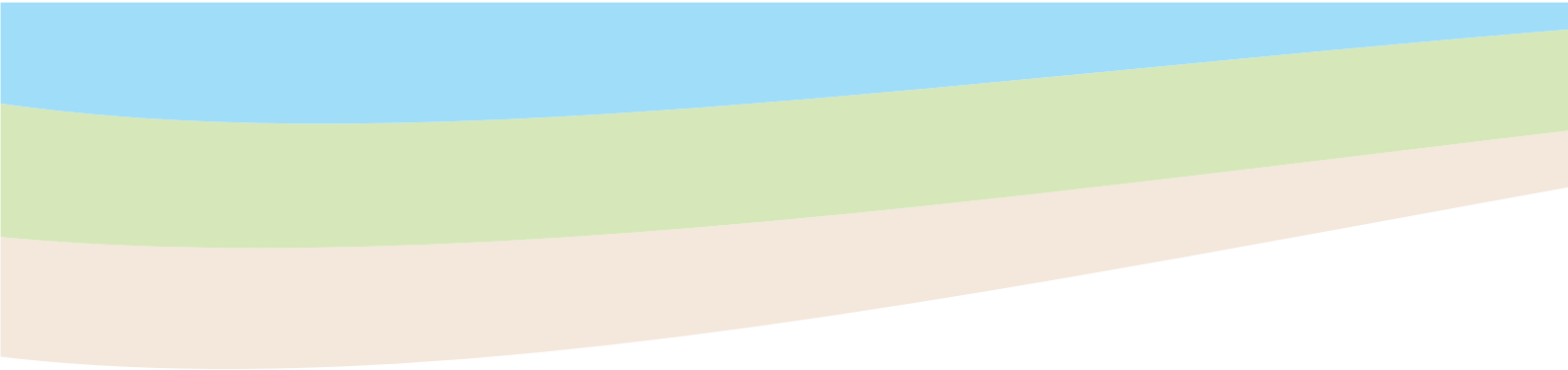
En este apartado se muestra un marco general de los conflictos que han sido identificados y caracterizados en cada una de las regiones en que desarrolla su trabajo el ONP, y que expresan las territorialidades en disputa entre una visión productivista economicista del territorio y una visión social popular del territorio. De igual manera, se hace una aproximación al ejercicio de priorización y definición del eje articulador de los procesos populares en la región.

El mapa de la conflictividad territorial en la región Nororiente

El trabajo desarrollado con las organizaciones sociales populares de la región Nororiente arrojó que buena parte de los conflictos y la dinámica de la conflictividad que se vive en sus territorios se circunscribe en ocho de las catorce categorías recogidas para el estudio de los conflictos territoriales a nivel nacional. Éstas son: 1. Ambiental (asociado especialmente con el tema del agua), 2. Minería (oro y carbón); 3. Tierras (monocultivos agroindustriales); 4. Conflicto armado; 5. Narcotráfico (cultivo y corredor de comercialización); 6. Infraestructura (destacamos los megaproyectos de Hidrosogamoso y el oleoducto bicentenario); 7. Dinámicas de ilegalidad en las fronteras (contrabando, especialmente el de gasolina) y 8. Violencia y comercio sexual.

Los conflictos priorizados en el Nororiente

Como se apreció en el apartado anterior los temas de tierras, minería, infraestructura, narcotráfico y conflicto armado, ocupan un lugar central a la hora de construir lecturas sobre los conflictos y la conflictividad en la región del nororiente del país. En consonancia con estos elementos, las organizaciones sociales populares que participan del proceso del ONP consideraron que los conflictos que debían priorizarse en la región tenían que tener por lo menos las siguientes características: 1. Vinculados con el despliegue de proyectos agroindustriales; 2. Involucraran en sus repertorios de lucha la defensa del agua; 3. Implicarán un proceso de reordenamiento territorial por el despliegue de megaproyectos infraestructurales, y 4. Relacionado con la explotación minera a gran escala.



Estas cuatro características aunadas a dos más producto de su condición de territorio de frontera y el carácter transversal que cobra el conflicto armado en todo el análisis de la conflictividad territorial condujo a la priorización de los conflictos identificados .

El eje articulador de los procesos populares en el Nororiente: La defensa del Agua

El reconocimiento de la importancia de la articulación para el fortalecimiento de sus procesos impulsó un debate sobre cuáles eran esos elementos comunes que desde los conflictos priorizados hacían posible la construcción de agendas de trabajo comunes. Y aunque emergieron múltiples miradas y se narraron diferentes experiencias, desde el inicio se empezó a visualizar que existían tres ejes fundamentales a la hora de avanzar en un ejercicio de articulación: *Agua, minería y modelo de desarrollo*. Y aunque cada una de estas suponía abordar la cuestión de una manera distinta, todas confluían en identificar como comunes los impactos ambientales, alimentarios, económicos, sociales que estaban trayendo el despliegue de los conflictos.

El tema del **agua**, desde un inicio, empezó a perfilarse como uno de los más convocantes, en a razón a que es uno de los recursos más afectados por el desarrollo minero energético en la región (explotación de oro y carbón, el uso del recurso para el desarrollo agroindustrial y la construcción de hidroeléctricas) y porque se constituye al decir de muchos en el bastión último para la defensa de sus territorios.

De esta manera fue posible establecer un acuerdo entre los procesos organizativos del Nororiente que han confluído en el ONP para definir **el agua como eje de articulación**. El agua es entendida no simplemente como recurso natural con un valor económico, sino como un recurso que dota de sentido a las comunidades y sus territorios, como recurso vital que garantiza seguridad y soberanía alimentaria autónoma.

Es necesario destacar que la posibilidad de que el agua cobrara ese carácter articulador obedece entre otras cosas a que buena parte de la dinámica de conflictividad en la región se lee a la luz de los impactos ambientales. Esto es, los conflictos vinculados con la construcción de infraestructura, los cultivos extensivos destinados a la producción de agrocombustibles, la explotación petrolera, la presencia de cultivos de coca y las exploraciones y explotaciones mineras, han puesto sobre la mesa la tensión existente entre una racionalidad economicista y productivista que asume el territorio como recurso objeto de explotación y que a su paso está dejando una profunda huella ambiental, y una racionalidad comunitaria que asume el territorio como abrigo, como lugar de encuentro y vida de las comunidades.

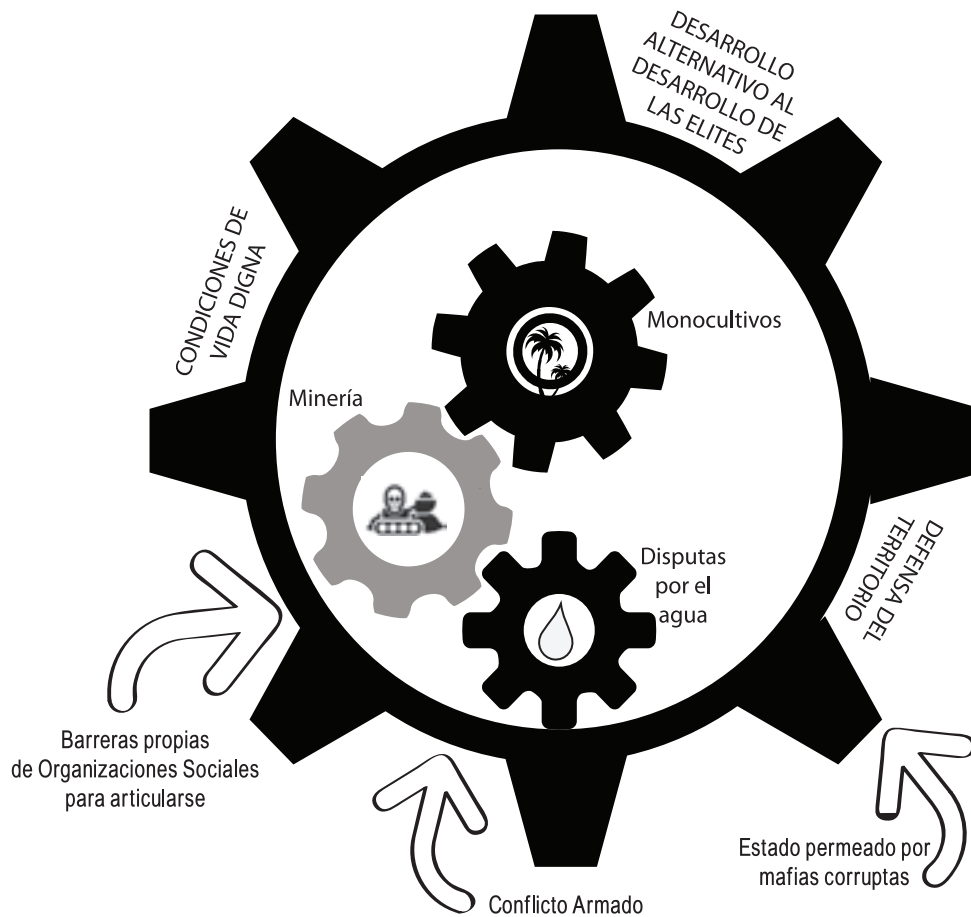
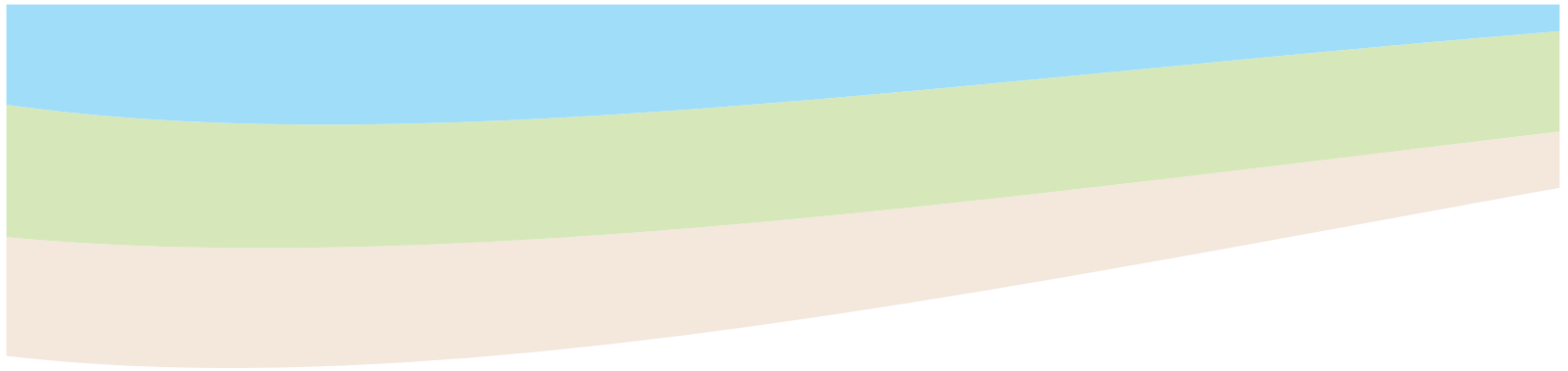


Ilustración 1. Articulación y priorización de conflictos en la región Nororiental
 Fuente: Presentación región nororiental Taller nacional, Marzo 10 y 11 de 2012

Ahora bien, el profundo impacto ambiental que se ha desplegado con un modelo de desarrollo económico reprimarizador y la importante capacidad organizativa de la región en torno a la conservación y protección del ambiente, especialmente de las fuentes productoras de agua, así como de sus ecosistemas productores/protectores, hizo posible entonces que la Defensa del Agua se constituyera en el eje articulador.



El mapa de la conflictividad territorial en la Región Central

A diferencia del Nororiente, en donde buena parte de sus conflictos están asociados con su riqueza minero energética, en este territorio la definición de una nueva espacialidad urbana-rural y la defensa por la Seguridad Soberanía y Autonomía Alimentarias –SSAA– se constituyen en ejes fundamentales para explicar la conflictividad en el marco de una estrategia de desarrollo que se piensa ahora en lógicas de convergencias regionales. Buena parte de la estrategia infraestructura del país, de conexión vial, pasa por adecuaciones que se cruzan en el territorio de la región Centro. De igual manera, los desarrollo infraestructurales en términos de zonas francas y centro de servicios.

Esta región es una de las zonas del país donde se presenta un alto número de conflictos de las 14 categorías trabajadas. Se destacaron siete por la centralidad que cobran para el análisis: ambiental, infraestructura, ordenamiento territorial, minería, conflicto armado, tierras y narcotráfico.

Los conflictos priorizados en la región central

El carácter estratégico de la región central para viabilizar la estrategia de desarrollo infraestructural propuesta por el gobierno nacional fue un elemento fundamental a la hora de avanzar en el ejercicio de priorización de conflictos. Buena parte de los conflictos priorizados tienen vínculos con el despliegue de megaproyectos infraestructurales en los territorios.

Las razones que han motivado a que este tipo de obras genere conflictos obedecen a los impactos que en términos ambientales, alimenticios, laborales y sobre la tenencia de la tierra están generando en los territorios. Es necesario destacar que aunque estos conflictos estén clasificados dentro del tema infraestructural, guardan un vínculo orgánico con los conflictos que hemos denominado por tierras, ambientales y por ordenamiento territorial.

El eje articulador de los procesos populares en el Centro: Agua

La definición de un eje articulador en la región central estuvo determinada por un profuso debate en torno a la necesidad de avanzar en la construcción de un modelo de sociedad que reconociera la diversidad del pensamiento y que posibilitará afrontar la





lucha social y política contra el orden social capitalista. Al decir de algunos líderes y lideresas en este proceso la educación, la cultura y la defensa por la SSAA deberían ocupar un lugar protagónico.

La articulación se entendía entonces como una posibilidad de abrir el escenario a la acción conjunta a partir del respeto y el reconocimiento de los procesos identitarios y las luchas históricas que las comunidades han venido desplegando en sus territorios.

“Las comunidades y movimientos se articulan para crear una sola fuerza y acoger la participación de más personas con el fin de alcanzar el objetivo que se han propuesto. Cuando se articulan lo hacen de acuerdo a la necesidad que tienen, pero también es un proceso mediante el cual se quiere llegar a la unidad”. (Relatoría Taller local subregión Boyacá/Cundinamarca realizado el 2 y 3 de marzo de 2012 en la ciudad de Duitama. Pág.9)

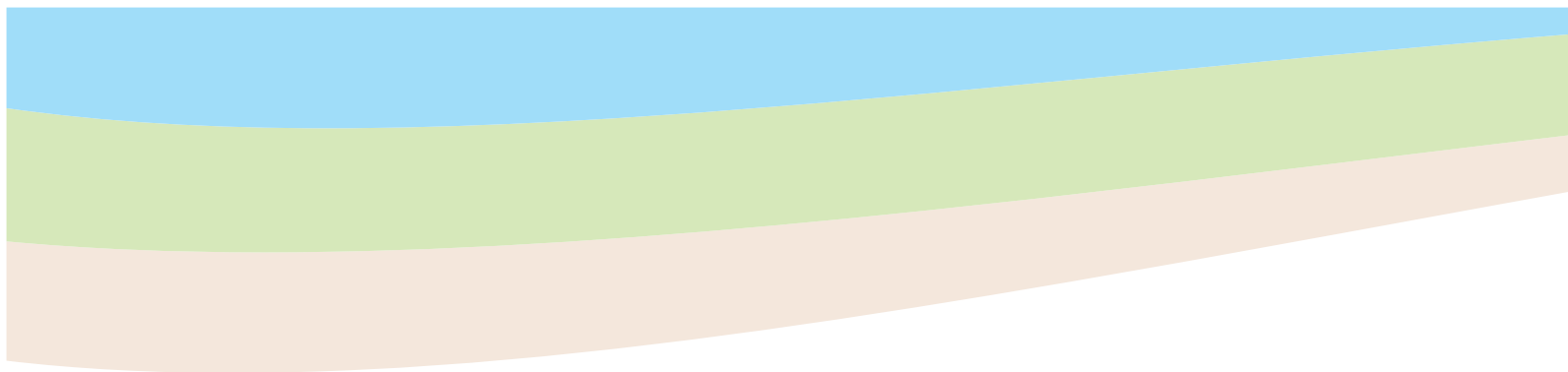
En ese sentido, la articulación expresa la búsqueda y construcción de horizontes de sentido comunes; también implica el establecimiento de consensos desde el respeto de la diferencia, la creación de escenarios de encuentro y de propuestas, el fortalecimiento de las redes, la potenciación de experiencias populares que propenden por la defensa del territorio. Supone igualmente, la importancia de reconocer la visibilización y el intercambio de experiencias en los territorios.

Las potencias transformativas que se identificaron a las articulaciones de los procesos sociales populares llevaron a la definición del agua como el eje articulador.

Proceso de acueductos comunitarios. Estos han posibilitado articular a las comunidades en torno a la gestión del recurso del agua. Se recalca el carácter latinoamericano que asume la lucha por este vital recurso, así como las posibilidades que en torno al agua existen en términos de construcción de políticas públicas populares. La importancia que adquiere este tipo de lucha para la sostenibilidad de las comunidades y sus territorios y, en consecuencia, la necesidad de afianzar procesos organizativos de nivel nacional, permitió entender que en este momento se avanza sobre la constitución de una organización que articule todos los acueductos comunitarios del país.

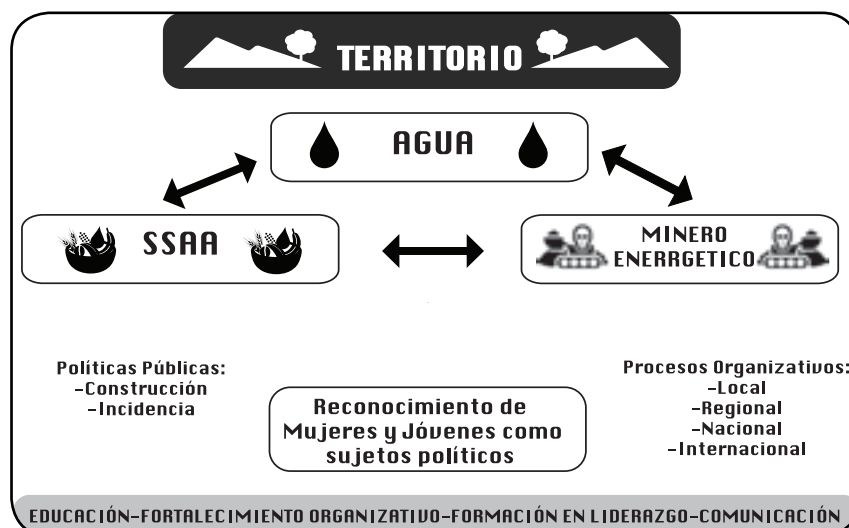
El agua se constituye en el eje articulador en tanto desde las dimensiones de los conflictos, como desde los repertorios y horizontes de lucha de las organizaciones sociales, se configura uno de los componentes fundamentales de la disputa social. Pero es impor-





tante destacar que no es el agua en un sentido jerárquico, sino desde su circularidad. Esto es, en su relación orgánica con la defensa por la seguridad y soberanía alimentaria autónoma y en contra de los megaproyectos minero energéticos e infraestructurales que amenazan su sostenibilidad. En la siguiente gráfica se muestra la manera como se llegó a la definición del agua como eje articulador.

Ilustración 2. Articulación y priorización de conflictos en la región central



Fuente: Presentación región central Taller nacional, Marzo 10 y 11 de 2012

Como se puede apreciar en la gráfica, el agua logra articular en torno así dos de los componentes que explican la conflictividad en la región Central: el tema de la explotación minero-energética y sus impactos frente a la SSAA. Tanto la explotación de oro a cielo abierto como la construcción de presas eléctricas están generando un proceso de contaminación del recurso y una limitación al acceso para el pequeño productor, poniendo en cuestión la sostenibilidad alimentaria de las comunidades que habitan en dichos territorios.





El mapa de la conflictividad territorial en la Región Caribe

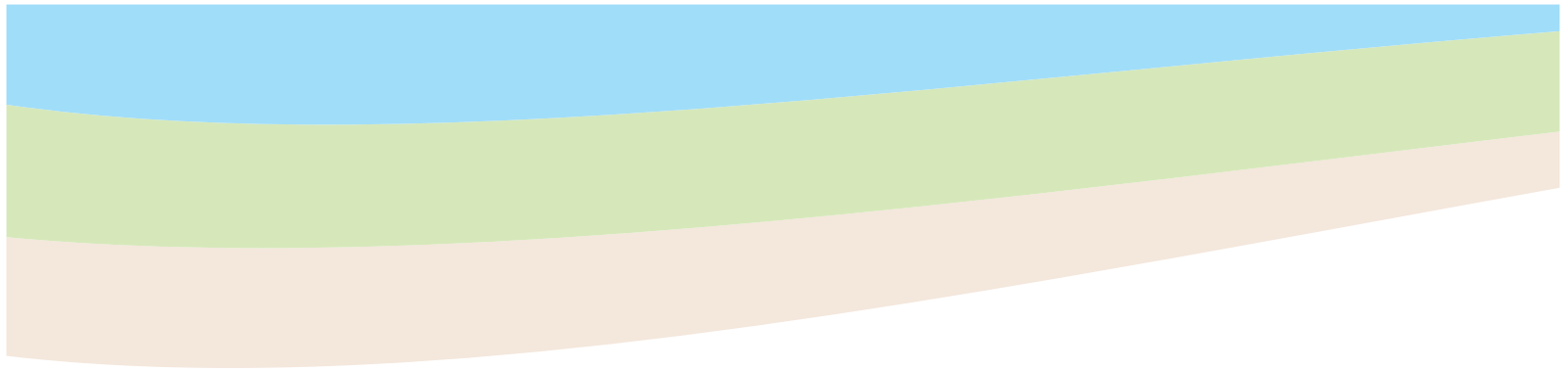
Las organizaciones sociales populares que participan del proceso del ONP destacaron 8 categorías que ayudan a atender la dinámica de la conflictividad en la región: conflictos por tierras, minería, jurisdicciones étnicas, conflictos ambientales, infraestructura, conflicto armado, culturales y desplazamiento forzado. Es necesario destacar que el narcotráfico tiende a leerse de cara a la acción de los grupos paramilitares en el territorio. Por tal razón, no las reconstruimos desde dos dimensiones de análisis diferentes. De igual manera, sucede con la violencia de género, pues aunque no se reflexiona sobre ella como un eje central de análisis, sí tiende a enunciarse de cara al accionar de los grupos armados, especialmente los paramilitares.

Los conflictos priorizados en la región Caribe

El mapa general de la conflictividad en la región Caribe permitió avanzar hacia un ejercicio de priorización de los conflictos. Las organizaciones sociales populares acordaron que de las ocho dimensiones identificadas se privilegiarían tres: Minería, Tierras e Infraestructura. La selección de este tipo de conflictos obedeció al tipo de organizaciones participantes, así como que es en torno a estos tres temas que hoy se disputa por parte de las comunidades la defensa y permanencia en sus territorios.

El eje articulador de los procesos populares en el Caribe: Territorio, identidad y cultura

El ejercicio de definición de un eje de articulación en la región Caribe concitó una reflexión muy valiosa en torno a la manera como los diversos procesos organizativos (indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores) concebían el territorio, en razón a que desde los inicios mismos del proceso del ONP las organizaciones manifestaron que sus luchas giraban en torno a la defensa y permanencia en sus territorios.



Como miembros de la organización Suliwou Laulayu soñamos con un territorio libre de explotación minera, con la construcción de un plan de vida que oriente el destino de nuestras comunidades, con una organización fuerte e incluyente en donde estén representadas todas las comunidades que hoy hacen parte de los territorios no resguardados del municipio de Riohacha. Conviviendo en un clima de armonía, paz y tranquilidad, haciendo uso de nuestra autonomía y desarrollando proyectos productivos autosostenibles. Soñamos con la erradicación del analfabetismo y la ignorancia, con la comprensión y respeto de los arijunas y otras organizaciones. Soñamos con el posicionamiento de nuestro proceso organizativo a nivel local, regional y nacional, con la recuperación y fortalecimiento de nuestro sistema cultural (Relatoría Taller Subregión Guajira realizado el 18 y 19 de febrero de 2012 en la Ranchería Brisas del Mar-Riohacha. Pág. 6)

Se configura así al territorio como el eje central que puede potenciar y materializar procesos organizativos conjuntos en la región Caribe. Sin embargo, se destaca que es el territorio entendido en tanto expresa los procesos identitarios y culturales que definen las maneras como las comunidades se apropian de él. En este sentido, el eje de articulación sería: Tierra, territorio, identidad y cultura.

El carácter articulador de dicho eje radica en la posibilidad de cruzar las múltiples dimensiones que relacionan los conflictos priorizados: problema de la tierra, SSAA, protección ambiental, explotación del trabajo, satisfacción de mínimos vitales, entre otros. El componente identitario y cultural que dota de especificidad al eje se potencia en el encuentro entre el mundo rural del campesino, el mundo marino del pescador y la cosmovisión india y afrocolombiana.

De manera particular se quiere hacer mención al papel de la mujer en este proceso de articulación, en tanto es entendida como actor protagónico de la pervivencia cultural. Al respecto, es bastante ilustrativa esta caracterización de las mujeres Wayuu:

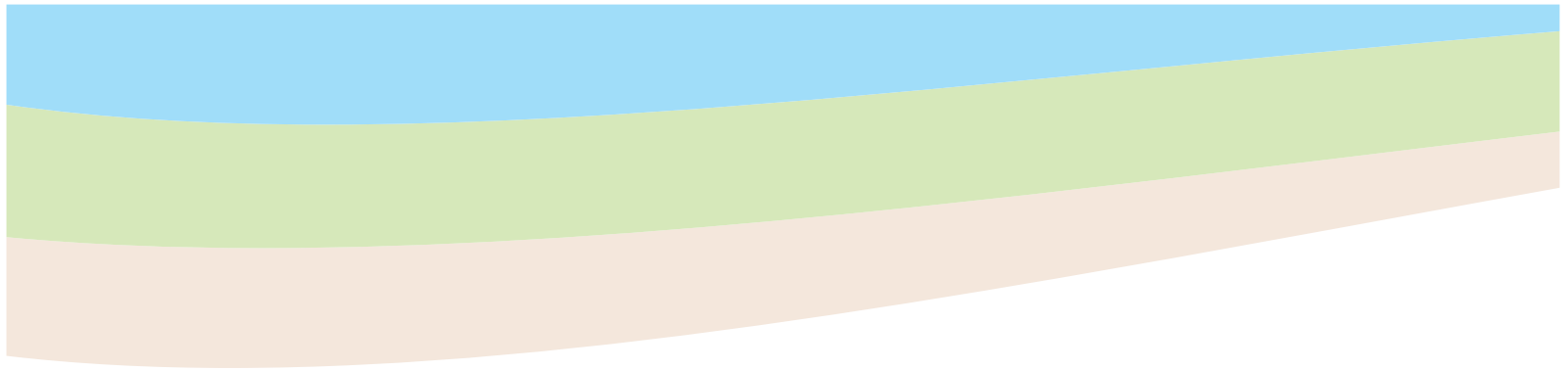


“En la historia del departamento la mayoría de líderes han sido mujeres. En la cultura nuestra el hombre wayúu cumple un papel fundamental dentro de un territorio. En los conflictos internos que hemos tenido la que sale a la ciudad ha sido la mujer, el hombre no porque debe estar mantenido en pie de lucha defendiendo su territorio. Entonces la mujer wayúu ha tenido un papel fundamental. Quienes ejercieron liderazgo han sido las mujeres, en las guerras, porque salen, por eso ha sido más fácil el acceso de la mujer a las instituciones públicas, a las relaciones. La mujer wayúu es la base, somos las que parimos, somos las que gestamos; el wayúu, el araura es el jefe que coordina, que hace el mando; igual, la mujer es la base de él, es la familia, porque el wayúu da familia a otra familia. (Relatoría Taller Subregión Territorio Wayuu realizado el 22 y 23 de febrero de 2012 en la Ranchería Tarourumana- Maicao. Pág. 7)

CONFLICTOS SOCIALES



Ilustración3. Articulación y priorización de conflictos en la región Caribe
Fuente: Presentación región caribe Taller nacional, Marzo 10 y 11 de 2012



El mapa de la conflictividad territorial Los conflictos en la Región Suroccidente

El control territorial que ejercen los grupos armados en la región del suroccidente, ya sea por el carácter geopolítico o geoeconómico estratégico, la configura como una de las regiones del país más conflictivas y con unos altos índices de la criminalización de la protesta social. De las 14 categorías de conflictos construidas en el ONP en el suroccidente se destacan: conflicto armado, narcotráfico, minería, hidrocarburos, infraestructura y tierras. Es necesario mencionar que buena parte de los conflictos minero energéticos y por el narcotráfico expresan directamente conflictos ambientales y amenazas a la SSAA.

Los conflictos priorizados en la región Suroccidente

El proceso de exploración y explotación minero-energética que se ha venido desarrollando en el Suroccidente colombiano durante la última década es un elemento importante a la hora de aproximarnos al análisis de la conflictividad social en la región. En efecto, la contaminación ambiental, la militarización territorial y el despojo de tierras que ha caracterizado este proceso han impulsado una fuerte resistencia social popular en la región.

En este mismo sentido la fuerza que ha cobrado el fenómeno de la siembra de cultivos de uso ilícitos y de la agroindustria, en especial de la palma, ha activado un número importante de conflictos en las comunidades que ven con el desarrollo de estos megaproyectos un desafío para garantizar la SSAA en sus territorios. Aunado a estos elementos, la disputa de los diversos actores armados por el control de este territorio, ha imprimido un grado más alto de complejidad a la dinámica regional.

El eje articulador de los procesos populares en el Suroccidente: Territorio y cultura

La definición del eje de articulación en la región del suroccidente del país estuvo medida por el carácter transversal que éste debería asumir a la hora de avanzar en un ejercicio de superación, cualificación o transformación de las tres grandes dimensiones de los conflictos.





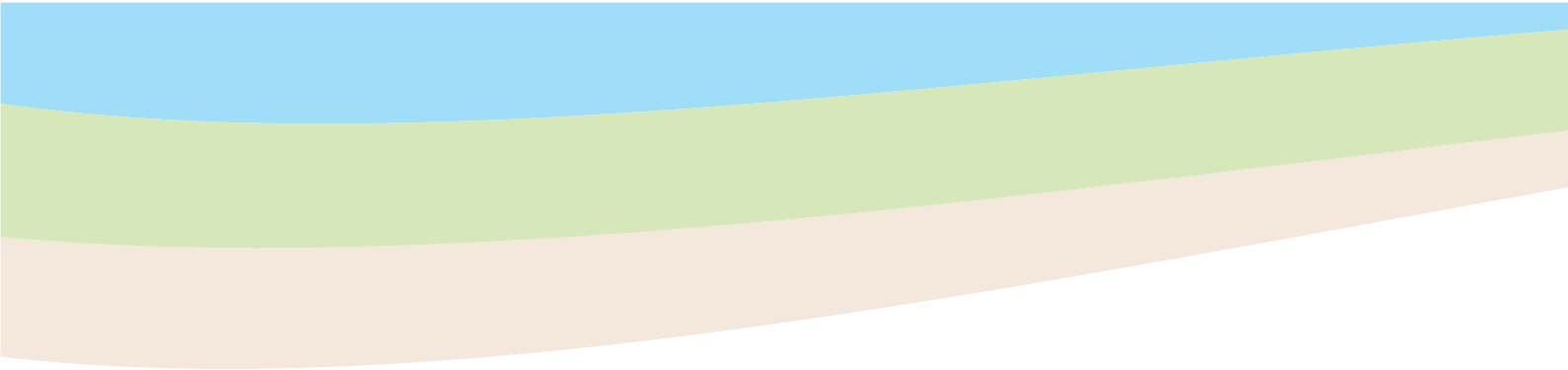
Ilustración 4 . Articulación y priorización de conflictos en la región Suroccidente

Fuente: Hipertexto región suroccidentes 2012

Por tal razón, se definió que el eje común a las luchas en contra de la minería, la agroindustria, el narcotráfico y la explotación de los hidrocarburos era el de territorio y cultura. En el siguiente llamado se recoge el sentir de las organizaciones frente a este proceso,

LLAMADO DESDE EL SUR. Hablamos desde el contexto del Seminario Regional: Una mirada subalterna de la conflictividad socio territorial en el suroccidente de Colombia” convocado por el Observatorio Nacional de Paz, un numero representativo de organizaciones de base social de campesinos, mujeres, afros, defensores de derechos humanos, indígenas, jóvenes, pobladores urbanos, quienes hemos asumido como mandato la realización de la paz como un acontecimiento en la cultura, como realización en la vida cotidiana, pero también como un acuerdo auténtico que no implique la humillación del otro lo otro diferente, sino la reivindicación de la vida integra, digna, en <<buen vivir>> como condiciones de posibilidad que permita el respeto de lo humano, la equidad de género y generación y aceptación de la diversidad que tienen como potencialidad nuestros pueblos y territorios.

Somos niñas y niños, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, artistas, afro-colombiano, pobladores urbanos de un territorio que tiene y ha tenido unos profundos lazos culturales que les unen, especialmente los valores fundantes que siempre han iluminado y conducido nuestro actuar. Estamos hablando de la solidaridad propia de los pueblos indígenas expresos en la minga, la alegría y sentido libertario de los pueblos afro-colombianos, la dignidad a prueba de los campesinos, un sentido y fin




autonomista de los mestizos. Con este legado podemos contribuir a una construcción de país, que sea capaz de reconocer en las regiones su solidez para contar con legitimidad, más que su simple legalidad. Además nuestro territorio, hoy constituido por los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá en el pasado reciente estuvo hermanado por profundos nexos culturales e históricos; a su vez depositario de riqueza en diversidad biológica, por su condición panamazónica, estrellas fluviales, sistemas paramunos cuencas y micro cuencas que abastecen un hilo entramado de ríos, quebradas, lagos, lagunas, esteros, ecosistemas de manglar que en sí mismos son patrimonio en primer lugar y en forma soberana de nuestros los pueblos y de la humanidad.

Todo este panorama de riqueza humana, de expresiones de culturas de pueblos que tienen prácticas y condiciones diferentes, se ve hoy atravesado por los impactos de conflictos que vinieron a la región, especialmente por la implantación de cultivos de uso ilícito, el enfrentamiento que por disputa territorial sobreviniente de todos los actores legales e ilegales, además de las tensiones que pueda producir la implementación de proyectos minero-energéticos. En medio de estas condiciones, la Región no puede seguir un proceso de agudización del conflicto que en esta coyuntura ha visto acontecimientos como los sucedidos en Tumaco, Norte del Cauca, Caquetá y Putumayo, muchos sitios de la región donde las vejaciones y violaciones a los derechos han sido indignantes; cuando como sociedad seguimos reclamando el derecho a unas condiciones de paz, de vida digna, gobernabilidad con espacios participantes y de solución a ingentes demandas sociales aplazadas.

En este marco, con la voz, afecto y emoción propia anunciamos y reivindicamos la reconstrucción social de la región sur-colombiana, ahora invitamos a reconstruirla en diversos niveles, los propios de los mandatarios de la democracia representativa: gobernadores, alcaldes, concejales, diputados; pero también con los investigadores y académicos; por supuesto con los periodistas y maestros, que llevan a toda la región sus mensajes y sentidos simbólicos; esta vez animada en una nueva y legítima aspiración por movimientos sociales de pobladores urbanos y rurales y nuevos sujetos sociales de mujeres, niños y población diversa.





Sí en efecto proponemos avanzar en prácticas que conduzcan al buen vivir concebido como un enfoque constructivo que debe animarnos a reivindicar los derechos humanos y los de la naturaleza, a armonizar todo el conjunto de redes, vínculos y nuevos pactos sociales, el buen vivir es una posibilidad de crecimiento productivo en todos los niveles, el económico y por supuesto también el cultural. Desde esta aspiración y enfoque proponemos a las autoridades, academia y medios de comunicación abrir un debate amplio sobre los escenarios e iniciativas de paz y la cultura de convivencia en nuestra región. Ese debate deberá conducir a estudiar propuestas de políticas públicas locales, regionales y acciones nuevas que rompan el círculo vicioso de la cultura de la muerte, que nos afecta a todos y todas. Estando próximos a la Cumbre de las Américas instancia a la cual deben llegar propuestas de base social e iniciativas de la región, consideramos que es oportuno volver a llenar de contenido una agenda pública amplia de debate, reflexión y hechos de paz para la Región Sur-Colombiana. En esa agenda por supuesto deben estar, por ahora temas que tienen especial interés para la cotidianidad y vida pública de nuestro territorio, el país y el mundo; estamos haciendo referencia al tratamiento y alternativas frente a los cultivos de uso ilícito (despenalización, legalización, des-criminalización del consumo), los impactos sociales y ambientales de los proyectos minero-energéticos, la seguridad, la soberanía, la autonomías alimentarias, la educación pertinente, las relaciones fronterizas y de los pueblos, los derechos humanos y las salidas políticas frente al conflicto armado.

La esperanza es la posibilidad que la humanidad genere nuevos mundos posibles. Las fuerzas sociales, políticas y el rico tejido social-comunitario, sus hombres, mujeres y los artistas invitamos a recrear la región sur-colombiana. Pero ello no es posible sin nuevos imaginarios alternativos a nuestras acrecientes tensiones y a las violencias de todo tipo que producen profundos impactos en la vida colectiva e individual de las personas. Porque creemos profundamente en una cultura de vida, invitamos a una movilización permanente del pensamiento y a la sensibilidad de todas las fuerzas vivas en favor de una región creativa, solidaria, reorganizada social y territorialmente y en convivencia.

San Juan de Pasto, 25 de Febrero de 2012.



PRIORIZACIÓN Y EJES DE ARTICULACIÓN

Las dinámicas de la conflictividad territorial se leen, perciben y viven de manera diferenciada en cada una de las regiones del país. La vivencia y significación de los conflictos se explica desde las trayectorias de lucha y los horizontes de sentido de las organizaciones sociales populares, así como desde las múltiples maneras como las comunidades han geo-grafiado, dejado huellas, construido y apropiado social y políticamente sus territorios.

Sin embargo, pese a que la vivencia y significación de los conflictos varía entre las regiones, es posible avanzar en la identificación de unos lugares comunes que permitan construir lecturas articuladas desde la escala nacional sobre los conflictos territoriales que se viven hoy en el país. En efecto, cuando se realiza un cruce de los conflictos priorizados en las cuatro regiones del país se encuentra que son cinco las dimensiones privilegiadas para el análisis: Minero-energético, Infraestructural, Tierras, Narcotráfico y el Conflicto Armado. En las siguientes gráficas se expresan tanto las categorías de conflicto priorizadas a nivel regional, como los conflictos comunes a nivel nacional y sus ejes de análisis y articulación.

En las anteriores gráficas se puede apreciar cómo, a partir del ejercicio de priorización de conflictos en las regiones, fue posible pasar a la definición de unos conflictos comunes a nivel nacional. En el caso de los conflictos minero-energéticos, infraestructurales y por tierras se destaca su presencia en las cuatro regiones de trabajo. Para el caso específico de narcotráfico y conflicto armado se subraya su relevancia en dos zonas de frontera donde hoy cobra mucha intensidad el fenómeno de la guerra.

En la gráfica también se pueden apreciar dos dimensiones de trabajo de los conflictos priorizados. Una vinculada con los *ejes de articulación* definidos regionalmente, los cuales expresan las posibilidades de trabajo y diseño de una estrategia de incidencia conjunta entre los diversos procesos organizativos en cada una de las regiones. Y la otra referida a los ejes de análisis, que expresa las maneras a través de las cuales se pretende abordar investigativamente los conflictos priorizados.



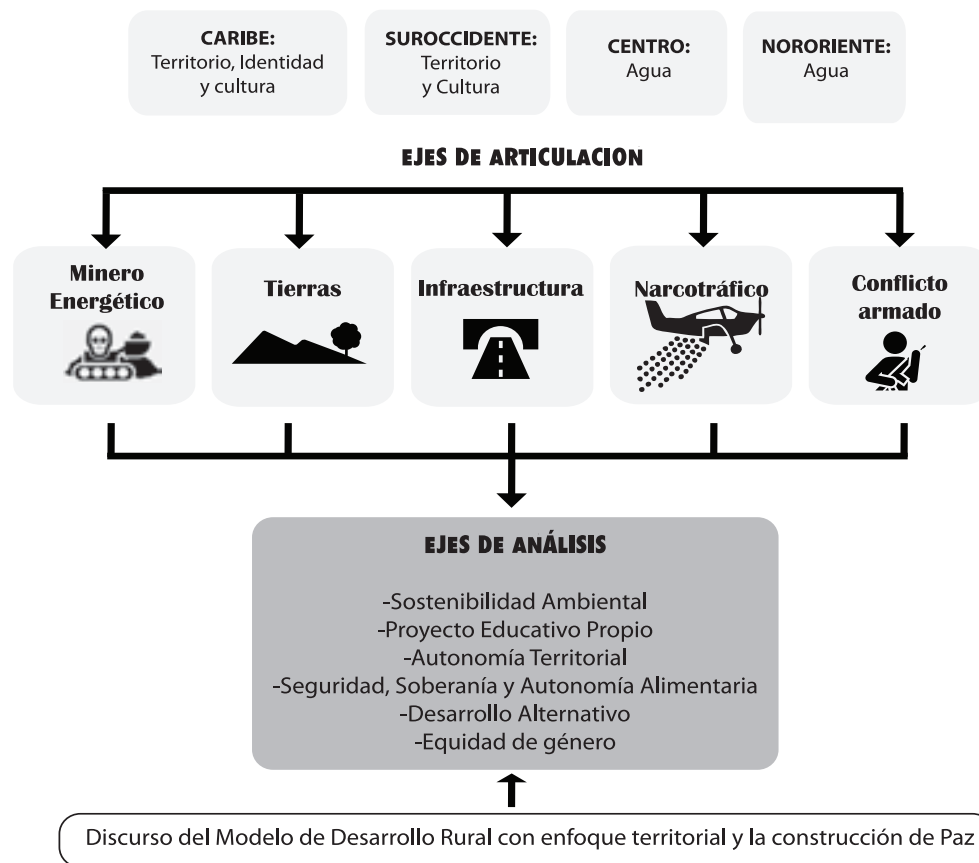
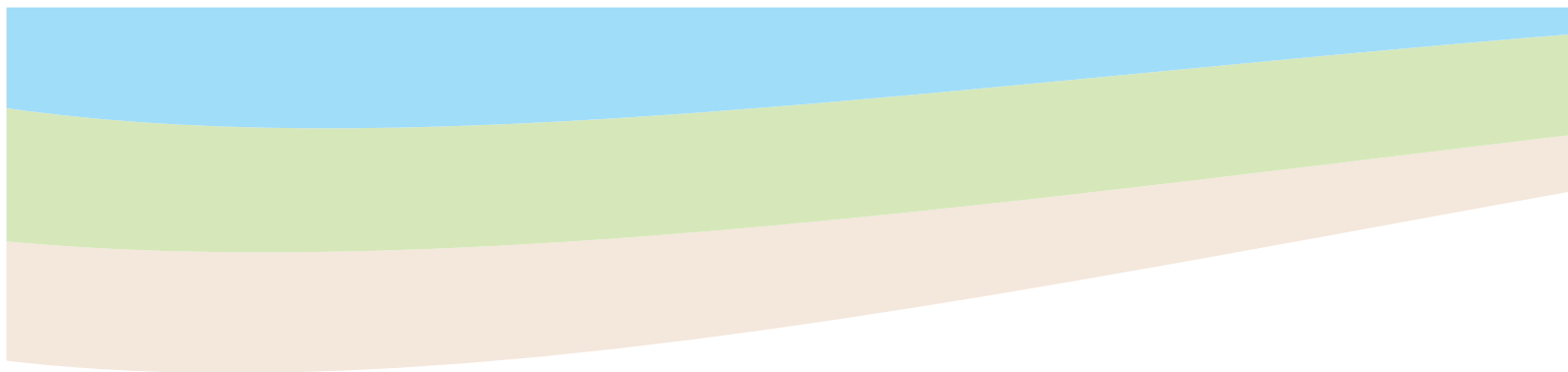


Diagrama de Conflictos comunes a nivel nacional

Se parte de considerar que las transformaciones en el modelo de desarrollo rural se constituyen en una base analítica para explicar la lógica de la conflictividad territorial. La razón está en que los soportes sobre los que se asienta la estrategia rural en el escenario contemporáneo, la explotación minera y de hidrocarburos y el desarrollo de megaproyectos agroindustriales e infraestructurales, son elementos centrales para explicar los conflictos que se viven hoy en los territorios.




El ejercicio de priorización de conflictos ha permitido entablar diálogos comunes y reconocer al otro y reconocerse en las luchas de los otros. La discusión terminó perfilándose como un espacio político del encuentro, el cual posibilitaba pensar las resistencias desde lo colectivo regional, desde las solidaridades de los diversos sujetos sociales y políticos presentes en los territorios.

En este sentido, se puede decir que la priorización contribuyó a la transformación de los imaginarios sociales de las organizaciones ya que posibilitó dejar de pensarse desde su proceso local, al convocar a pensarse desde la dinámica regional. A continuación se mostrará una síntesis de cómo se desarrolló este proceso en cada una de las regiones.

las organizaciones en sus territorios. No quisimos dejar la caracterización de los conflictos en la generalización de las dimensiones, sino que intentamos mostrarlo lo más específico posible de acuerdo a la información sistematizada.





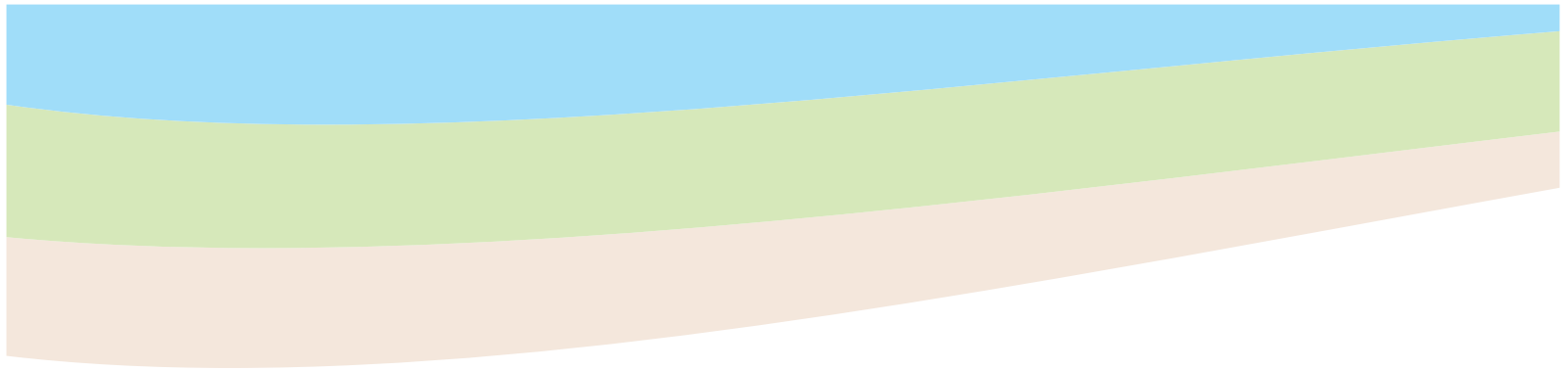
El Desarrollo Rural como un elemento de trabajo importante en el camino de construcción de propuestas de paz

Varias de las iniciativas legislativas que ha promovido el actual gobierno de Juan Manuel Santos están dirigidas a proponer algunas transformaciones en la forma como el Estado ha venido atendiendo los territorios rurales, a sus pobladores y a los diversos actores involucrados en su dinámica. Esto no es una coincidencia, si se tiene en cuenta que el gobierno ha querido sustentar su programa, en torno a la continuidad e impulso de lo que ha denominado las locomotoras del desarrollo dentro de las cuales tienen considerable importancia, la del agro y la minera.

Tienen especial importancia estas locomotoras, si se tiene en cuenta que uno de los fuertes propósitos de los recientes gobiernos, ha sido el de sustentar la economía colombiana en la extracción y explotación de todos los recursos presentes en los territorios ya se trate de oro, carbón, coltan y otros minerales, ó hidrocarburos, agua, biodiversidad, recurso forestal y otros recursos. En efecto, nuestra economía cada vez se dirige con más fuerza hacia la extracción de materias primas para la exportación, lo cual tiene, como es de esperarse, varias repercusiones en los territorios y en su ordenamiento.

Al mismo tiempo que se promueven políticas para poner en marcha las locomotoras, se empiezan a presentar o se visibilizan con más fuerza, conflictos en los territorios donde éstas cobran principal materialidad, es decir, en el campo. No en vano, ha sido evidente la emergencia de una multiplicidad de expresiones de diferentes poblaciones que se oponen al desarrollo de grandes proyectos minero energéticos y a trans-





formaciones productivas del suelo rural que no son consultadas, o que no se sustentan en decisiones comunitarias y en beneficio del interés general.

Frente al panorama, entidades internacionales, de cooperación y organizaciones sociales, han propuesto diversos debates, reflexiones, movilizaciones y publicaciones referidas al panorama actual del campo y a sus desafíos frente al momento actual de modelo de desarrollo económico. En lo que tiene que ver con el proceso del Observatorio Nacional de Paz, de las diferentes dimensiones de conflictos en las que han trabajado las diferentes organizaciones sociales populares que han participado en este proceso de reflexión, es notorio que la mayoría de los conflictos identificados están asociados al entorno rural, si bien no se trata de que todos los conflictos en los que hemos trabajado sean rurales, si es pertinente no dejar de lado que gran parte de ellos se expresan en relación con el campo.

De acuerdo a lo anterior, para su tercer año de trabajo, el ONP ha querido destacar que son muchas las iniciativas y expresiones que nos permiten percibir, cómo lo rural, después de haber sido un escenario de alguna manera abandonado y olvidado en el país, en los últimos años ha entrado a cobrar gran centralidad y cómo las decisiones de política y la cotidianidad de los territorios, han hecho el viraje para que se vuelva a poner los ojos en el campo. No queremos decir con esto que no se estén presentado conflictos de gran importancia en las ciudades, o que los espacios urbanos no se estén transformando con gran fuerza. A lo que quisiéramos apuntarle durante el tercer año, es a generar la reflexión que nos permita reconocer como el modelo económico, cada vez más, tiende a sustentarse en los territorios rurales y en todos sus recursos, lo cual es importante para entender cuáles son y hacia dónde le apuntan las transformaciones que se están dando, tanto en el campo, como en la ciudad, de acuerdo a la fuerza que también cobran, de acuerdo a lo planteado, las relaciones urbano-rurales, en aras de posicionar a Colombia como una economía emergente que se sustenta en la extracción de los recursos naturales y su exportación.

Consideramos que una comprensión de lo rural, de la manera como lo están viendo los diferentes actores en los territorios, permite resignificar el sentido de las acciones colectivas de las organizaciones sociales populares y, en esa medida, fortalecer sus agendas y propuestas encaminadas a la defensa del territorio.



Construcción de paz y negociación

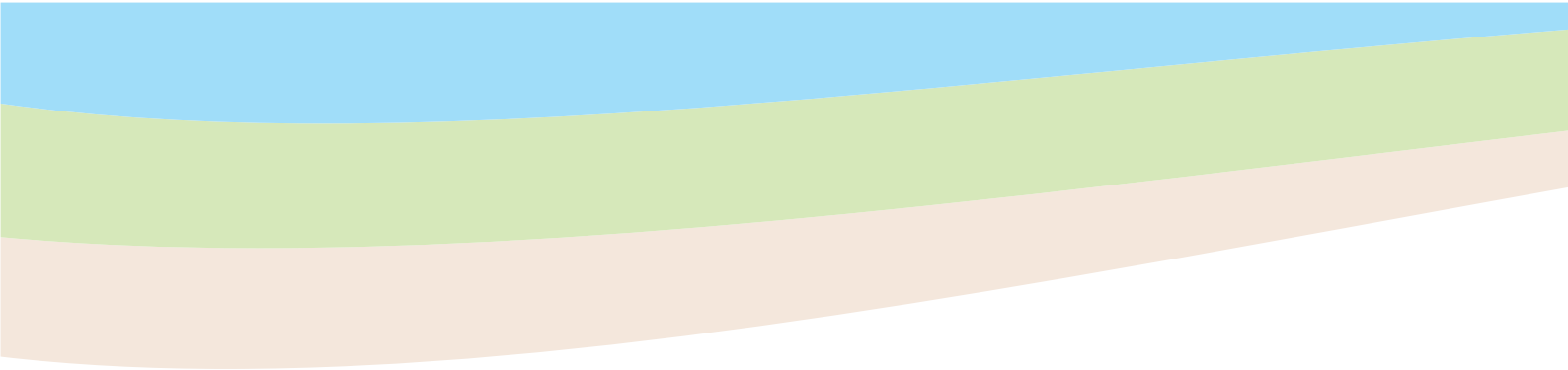
La única paz no es el desarme. La negociación del conflicto armado implica dar el primer lugar a los derechos políticos. Es efectivamente una oportunidad para transformar porque ni las élites ni los partidos han realizado por sí mismos un cambio que de sustento real a la equidad, la justicia y la democracia; por el contrario, en muchos escenarios los conflictos –en particular el amado– han sido usados para fortalecer poderes y fortunas.

La negociación es uno de los pasos sustanciales para dar continuidad a la construcción de la paz, y supone la creación de condiciones políticas, sociales, culturales y económicas para que los múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana se resuelvan sin que ninguno de los actores involucrados en ellos recurra a estrategias bélicas que impliquen la eliminación física o simbólica de los adversarios.

Así, la *construcción de la paz* y la erradicación del *estado de guerra* comprenden al menos tres requisitos:

- Garantías político democráticas: Garantizar institucional y socialmente que los conflictos sociales puedan resolverse o cualificarse mediante mecanismos políticos democráticos, que guiados por la materialización de medios para ofrecer una vida digna permitan la participación directa y decisoria de los más afectados.
- No más militarizaciones: Impedir la militarización, legal o ilegal, de la vida social colombiana y la imposición de una lógica bélica de socialización, en virtud de la cual los antagonistas políticos son convertidos en enemigos que pueden ser tratados por debajo de los límites que separan lo humano de lo inhumano.
- Aclimatar la paz y garantías de no repetición: Detener los mecanismos sociales, políticos y económicos que convierten los conflictos sociales en conflictos bélicos, tratándolos como disfuncionalidades o desviaciones que deben ser combatidas y reprimidas para salvaguardar el orden social, y no como señales claras del deficiente funcionamiento institucional y sistémico de la sociedad colombiana.






¿Desde dónde y cómo entender el tema de Políticas Públicas Populares?

Es común escuchar a funcionarios del Estado o a grandes empresarios del país decir que las personas que se oponen a grandes proyectos de inversión en sus territorios representan “un obstáculo para el desarrollo” o que “sólo se quejan pero no saben lo que quieren”. Pues es una realidad que en muchas ocasiones el Estado impulsa, en alianza con otro tipo de actores, modelos de desarrollo para implementar en los distintos territorios que no recogen el sentir y los intereses de las comunidades que allí habitan. En estos casos muchas personas manifiestan su inconformidad porque estos modelos representan afectaciones a sus territorios y a su calidad de vida. Aunque sea difícil o inoportuno para el Estado y otro tipo de actores reconocerlo, existen en el país muchas organizaciones y movimientos sociales que plantean posturas críticas frente a las lógicas dominantes en el país y que acompañan sus reivindicaciones con propuestas alternativas de percibir, relacionarse y actuar en los territorios, demostrando que efectivamente sí saben lo que quieren.

Las lideresas y los líderes de las organizaciones sociales populares que han participado en el ONP tienen un conocimiento privilegiado sobre sus territorios. Durante años han habitado en estos lugares y allí han construido, desde sus tradiciones, costumbres, saberes y formas particulares de relacionarse, sus proyectos de vida. Conocen los recursos disponibles y sus potencialidades, así como también las implicaciones de las intervenciones de distintos actores, tanto externos como internos, que han dado lugar al desarrollo de diversos conflictos territoriales. Ellas y ellos viven sus territorios, razón por la cual es fundamental reconocer sus necesidades e intereses así como su participación a la hora de construir propuestas de desarrollo y tomar decisiones sobre aquello que es de interés de todas y todos, o lo conocido como “lo público”.





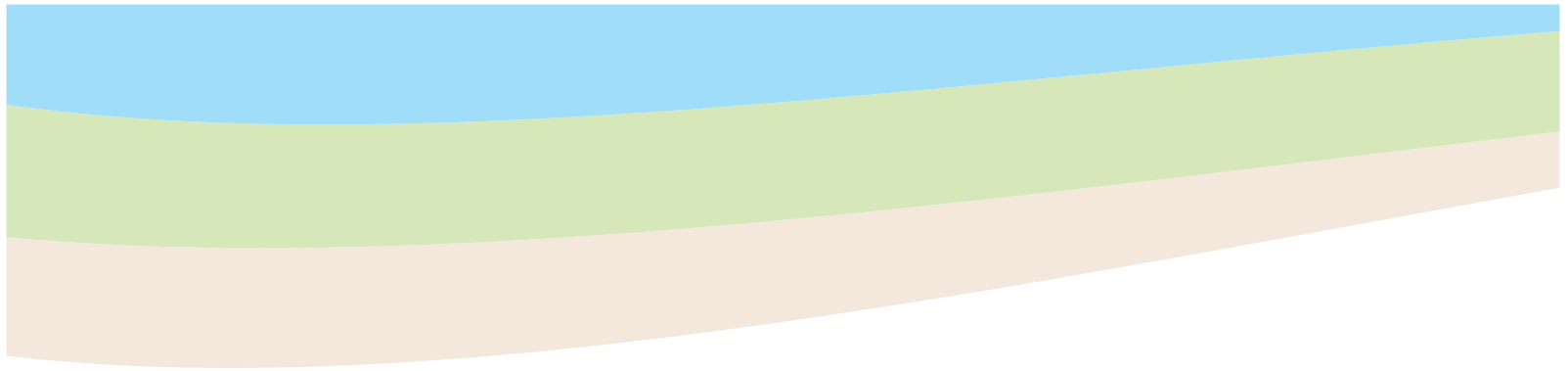
Muchas veces se relaciona lo público con lo que es del Estado y de la misma manera a las políticas públicas como la manera que tiene éste para materializar y concretar sus proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial. Sin embargo, como parte de la sociedad civil, las y los ciudadanos tenemos derecho a opinar frente a aquello con lo cual no estamos conformes y a participar en los espacios de decisión sobre aspectos que afectan nuestros territorios y nuestra calidad de vida. En este sentido, todas y todos construimos lo público, razón por la cual también podemos construir propuestas de política pública que tengan en cuenta nuestro sentir e intereses. En este contexto las políticas públicas populares adquieren importancia como un insumo para fortalecer a las organizaciones sociales populares y su capacidad de incidir en la construcción de lo público, a través de propuestas que recogen las reivindicaciones e intereses de las personas más afectadas por los conflictos que se viven hoy en el país.

El lugar de las organizaciones sociales populares: la construcción de paz desde sus saberes y acciones

Las organizaciones sociales populares que han acompañado el ONP están conformadas por mujeres y hombres que se han reconocido como miembros de sus comunidades y como parte de los territorios que cohabitan. En función de la responsabilidad que esto implica, han asumido un papel activo y consciente en la construcción de su realidad y en la búsqueda de que sus valores y posturas éticas se reflejen en la materialidad concreta de su cotidianidad. Sus apuestas y proyectos de identidad han entrado en contradicción y disputa con los intereses y acciones de otro tipo de actores que de manera dominante han impuesto sus percepciones y posiciones respecto al manejo de los recursos y el tipo de relaciones a construir en los territorios, lo cual ha dado lugar al desarrollo de conflictos que afectan en mayor medida a los sectores sociales populares. En medio de esta situación las organizaciones sociales populares han construido procesos que evidencian percepciones y modos de actuar alternativos, en función de eliminar todo tipo de exclusiones, inequidades y discriminaciones; su ámbito de acción no se restringe a lo local, en busca de fortalecer y articular sus procesos; actúan también a nivel regional y nacional e incluso, en muchos casos, con interrelaciones a un nivel global.

Estos sujetos sociales populares han llamado la atención sobre la situación que viven en sus territorios, visibilizando las afectaciones y evidenciando las relaciones de poder que se transforman en prácticas injustas y violentas. Al mismo tiempo han propuesto perspecti-






vas, usos y prácticas alternativas que permitan transformar y superar los conflictos territoriales para materializar lo que entienden por una vida digna o el buen vivir.

Los saberes populares reflejan una dimensión ambiental al plantear posturas críticas frente al uso de los recursos naturales, la transformación de los territorios y las maneras como se están modificando las relaciones sociales en sus territorios. Como alternativa plantean una visión que, al reconocer la importancia de los recursos de la naturaleza y al ser humano como parte de la misma, promueve su uso razonable y su defensa, en contraste con las agresivas prácticas de extracción y explotación de recursos que configuran hoy el modelo de desarrollo pensado desde el gobierno y otros actores como grandes empresarios y transnacionales. También dan cuenta de una dimensión económica al sentar su posición crítica frente a los modos dominantes de producción y distribución de la riqueza, y las políticas públicas de regalías e inversión (por ejemplo en sectores como educación, salud, vivienda y servicios públicos, entre otros). En contraste, proponen como alternativa el desarrollo de economías solidarias, que reconozcan el papel de los sujetos sociales populares en los ciclos de producción, distribución y comercialización, coherentes con la cultura propia de las comunidades y que permitan una distribución más justa de la riqueza, además de responder al cuidado y sostenibilidad de los ecosistemas naturales.

La dimensión cultural es clara en el sentido de que a partir de sus saberes y prácticas las organizaciones sociales populares expresan sus formas de ser, relacionarse y construir en la sociedad. El reconocimiento de sus tradiciones, creencias, imaginarios y prácticas particulares hace parte de las reivindicaciones fundamentales a la hora de pensar la construcción de sus territorios. El papel desempeñado por mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos(as) ha sido muy importante para entender que la construcción de paz implica el reconocimiento de distintos grupos poblacionales. El reconocimiento de las afectaciones y oportunidades específicas en el marco del desarrollo de los conflictos territoriales, e incluso respecto a relaciones de poder construidas al interior de sus mismas comunidades y organizaciones. Así como también resulta fundamental reconocer las formas específicas de participación de estos grupos poblacionales en los procesos sociales populares constructores de paz, teniendo en cuenta que plantean propuestas y apuestas propias.





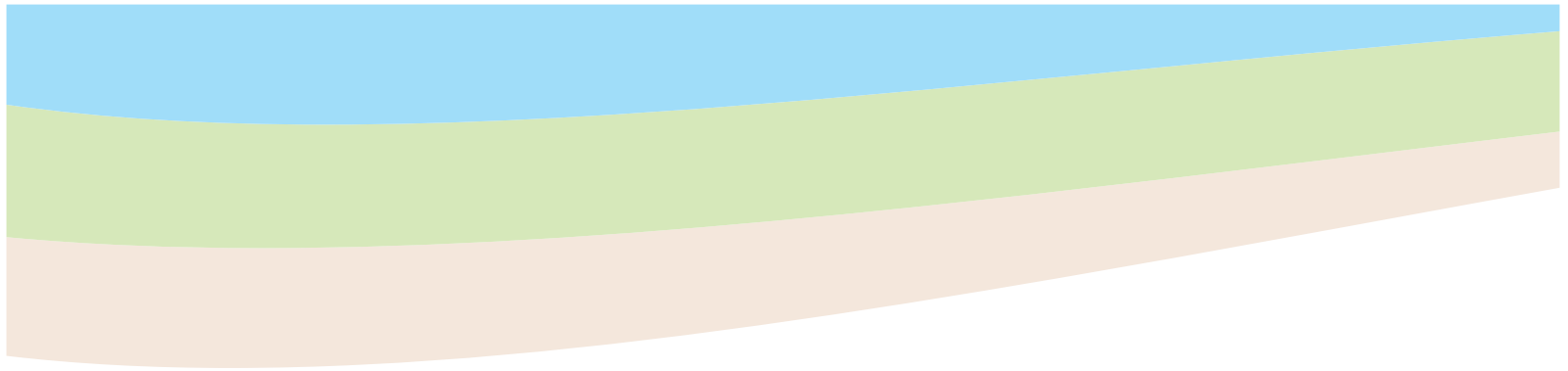
De múltiples maneras entonces, estas mujeres y hombres populares que se organizan y conforman redes de sociabilidad, grupos y colectivos para tramitar sus intereses en la sociedad, enriquecen a partir de sus saberes y prácticas los conceptos de justicia, democracia y paz. Recuperan el papel sustancial de lo social de la política al reivindicar la importancia de la participación de la sociedad civil, en particular de los sectores sociales populares, en la toma de decisiones respecto a aquello que es de todas y todos. Los recursos naturales, la salud, la educación, los derechos humanos, la participación, los derechos de las mujeres, entre muchos otros aspectos relacionados con el desarrollo de los territorios, son materia de interés de todas y todos y constituyen lo público, entendido como un escenario en disputa en el cual se construye el significado material y simbólico de lo colectivo y lo singular.

Lo popular como un escenario en disputa

El Estado representa el actor que se ha atribuido el monopolio del sentido de lo público y en función de ello incide de manera determinante en el ordenamiento y desarrollo de los territorios. Expresa una organización dominante o hegemónica de las relaciones sociales; constituido históricamente como el aparato político para administrar los recursos de la nación. Es importante tener en cuenta que no se trata de un actor monolítico ni homogéneo, pues en él confluyen distintos intereses y, por lo tanto, tiene expresiones diferenciadas; por ejemplo, no es lo mismo el Estado entendido desde la Corte Constitucional, la Presidencia, el Congreso, la Fuerza Pública o los distintos Ministerios, y mucho menos la expresión regional y local de las instituciones estatales o los gobiernos indígenas. Pero a pesar de la confluencia de diversos actores, es clara la capacidad de incidencia de algunos de ellos que, a través de alianzas, logran posicionar sus intereses y orientar el desarrollo de las funciones del Estado. El manejo de los recursos, el papel que desempeñan las instituciones, los beneficios que se buscan otorgar a través de la normatividad y la orientación que se les da a las políticas públicas estatales, expresan en gran medida los proyectos de sociedad de algunos sectores específicos.

Durante los últimos años el Estado ha venido transformándose, orientando su acción hacia la privatización de lo público. Estas transformaciones se han dado en el marco de cambios políticos, sociales, económicos y culturales que han implicado





nuevos mercados, tecnologías, comunicaciones y nuevas formas de regulación, haciendo que las fronteras sean más difusas y se genere una mayor dependencia de lo local, regional y nacional en relación a las dinámicas internacionales. El Estado ha pasado de ser un actor directo –interventor- a ser un simple regulador y, como tal, mediador de intereses privados. Esto ha significado cambios radicales en el sentido de lo público, diluyendo muchos aspectos como los derechos y la participación, entre otros, en función de la búsqueda de utilidades privadas.

Diversos actores como narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, élites políticas y económicas, empresas transnacionales y otros grupos sociales inciden, también a partir de comportamientos diferenciados, en la construcción de lo público. Las tensiones y disputas que se generan entre las distintas intervenciones e interrelaciones configuran conflictos que tienen desarrollo en lugares y con actores concretos. De manera particular nos interesa destacar el lugar del mundo de lo popular en la construcción de lo público. Lo popular, es entendido a partir de aquellos individuos y sujetos que cotidianamente construyen subjetividades, identidades y proyectos de vida, que inciden de manera consciente e inconsciente sobre *lo público*, y que son reconocidos en sus potencialidades y diversidad, pero también en su posición de desventaja respecto a los actores y grupos que inciden de manera dominante en la definición del sentido y el control de *lo público*, pues representa también el sector sobre el cual se ejercen diferentes tipos de relaciones de poder.

Como parte de lo popular, las organizaciones sociales populares que ha acompañado el ONP representan sujetos políticos críticos y propositivos que participan de manera activa en transformar las relaciones de poder que dan lugar a los conflictos a través de su experiencia organizativa. En muchos casos las mismas organizaciones no son conscientes de la importancia de sus esfuerzos en este sentido, representando aún un reto el que se reconozcan como sujetos políticos. Los procesos de resistencia y de construcción de paz que alimentan continuamente tienen un rasgo particular al darle un gran valor a lo común, aquello que les permite reconocerse como colectivo y proyectar sus búsquedas a partir de construcciones conjuntas; el proceso social de construcción de las reivindicaciones, los espacios, las propuestas o los sentidos compartidos. A partir de formas alternativas de entender lo común y de relacionarse respecto a ello, estas organizaciones inciden en la construcción de lo público.





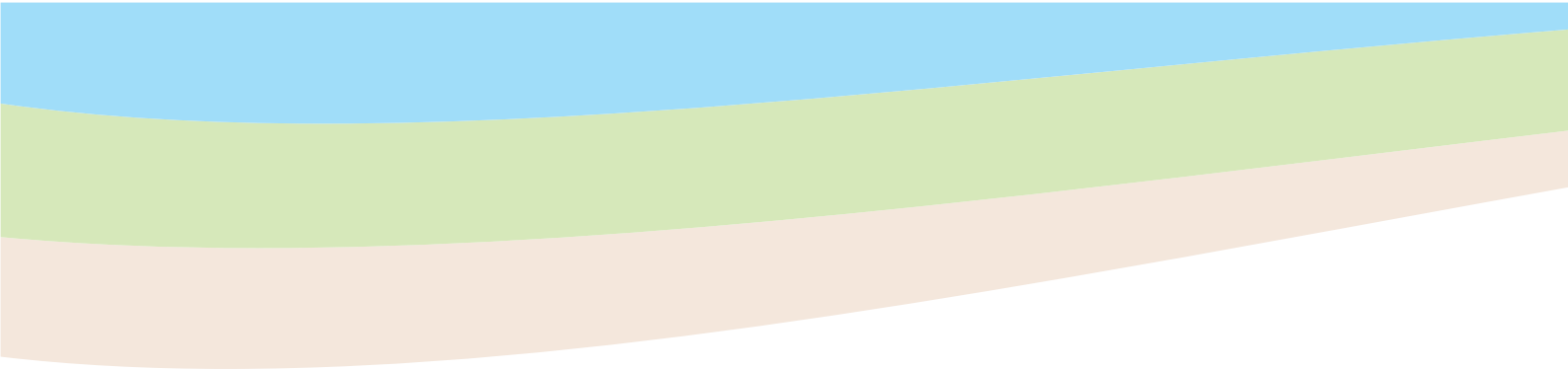
Incidencia de las organizaciones sociales populares a través de propuestas de política pública popular

El intercambio y la construcción conjunta de saberes que se ha dado en el marco del proyecto del ONP ha ayudado a enriquecer las percepciones y caracterizaciones de los conflictos territoriales que afectan a las organizaciones sociales populares, además de fomentar la articulación entre ellas y sus procesos constructores de paz a través de los ejercicios de priorización de conflictos y la definición de ejes regionales de articulación. En este momento del proyecto, se han valorado a las políticas públicas populares como una forma más de fortalecer los procesos de las organizaciones sociales populares. Estas expresan las propuestas construidas a partir de las reivindicaciones e intereses de los sectores sociales populares que, más allá de lineamientos o enunciados que señalan ejes gruesos de las luchas y apuestas, recogen de manera más concreta los planteamientos alternativos para la organización y construcción social de los territorios.

Los esfuerzos en este sentido implican reconocer el lugar de las organizaciones sociales populares en los territorios y en relación con los conflictos; buscar consensos y acuerdos respecto a cómo entender lo común y los resultados que se pretenden conseguir; pensar formas de generar cambios contundentes en las relaciones de poder, de modo que se eliminen todo tipo de exclusiones, inequidades y discriminaciones (tanto materiales como políticas y simbólicas); interpretarse a la luz del contexto de manera que sea posible vislumbrar estrategias de acción más acertadas para la transformación de los conflictos y la construcción de paz; pensar en la redistribución del poder y el reconocimiento de grupos poblacionales diferenciados, de importancia para los procesos locales, regionales y nacionales (mujeres, jóvenes, afrodescendientes, indígenas y campesinos-as).

Al reconocer que los actores sociales populares han construido propuestas alternativas para el desarrollo de sus territorios, reconocemos también que se han logrado avances importantes en la construcción de políticas públicas populares. Pero también resulta fundamental preguntarse si estos esfuerzos han sido lo suficientemente sistematizados o si las propuestas hasta hoy construidas pueden concretarse más, profundizando y cualificando sus contenidos. Para retomar entonces los avances en este sentido y partir de allí para continuar fortaleciéndolas, como también situarse en la posibilidad de lo que falta para lograr mayores claridades y una incidencia más efectiva en la transformación de los conflictos territoriales y la construcción de paz.






Para la sistematización, formulación y cualificación de políticas públicas populares proponemos tener en cuenta como referentes los siguientes puntos iniciales:

- Horizontes de sentido de las organizaciones y sus procesos. La interpretación y lectura de su lugar en los territorios, como actores de los conflictos que allí tienen lugar.
- Sentido político de las propuestas. Su orientación, objetivos y apuestas políticas, teniendo en cuenta la caracterización de los conflictos territoriales y la realidad del país a nivel local, regional, nacional y global. ¿Cómo entender y valorar lo común y la construcción de lo público? ¿Con qué contenidos enriquecerla? ¿A qué actores están dirigidas sus acciones? ¿Con cuáles hay un ejercicio de confrontación y con cuáles de cooperación?
- Posibilidades y potencialidades que tienen como actores populares para la construcción de propuestas de política pública popular. Las posibilidades que les brindan sus propios contextos, los acuerdos que existen entre los actores populares para la dinamización de sus acciones y el tipo de interrelaciones con otros actores externos.
- Recursos. Definición de los recursos sociales, políticos y culturales con los cuales cuentan las organizaciones sociales populares para elaborar e impulsar sus propuestas de políticas públicas y para lograr su ejecución.
- Lectura de la institucionalidad estatal. ¿Cómo perciben al Estado, en sus distintas dimensiones, para avanzar en la construcción de políticas públicas populares? ¿Cuál la posibilidad o no de interlocución con la institucionalidad estatal? ¿Qué tipo de Estado requerirían para ayudar a materializar sus propuestas?
- Visión de Región. Reglas, normas, valores y procedimientos, acordes con la democracia, para desarrollar dinámicas regionales que produzcan calidad de vida.
- Definición de una estrategia de acción. Estructuración de los planes y programas de acción que pueden llevar a la implementación de las políticas públicas populares, pasando por su formulación e impulso.





Teniendo en cuenta el proceso del ONP, consideramos que los conflictos priorizados y los ejes regionales de articulación representan referentes importantes para pensar desde allí la construcción de políticas públicas populares. Estas propuestas pueden servir como insumos para los procesos de las organizaciones sociales populares, teniendo en cuenta que permiten enriquecer el debate en escenarios públicos sobre las maneras de concebir y construir los territorios. De esta manera puede potenciarse la incidencia de las organizaciones sociales populares en la construcción de lo público, a través de la visibilización y el reconocimiento de las propuestas construidas, buscando generar presión para que la co-relación de fuerzas cambie en beneficio de los sectores sociales populares.





Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
Diagrama de conflictos del proceso del Observatorio Nacional de Paz.....	4
DINÁMICA DE LA CONFLICTIVIDAD REGIONAL.....	5
El mapa de la conflictividad territorial en la región Nororiente.....	5
Los conflictos priorizados en el Nororiente	5
Ilustración 1. Articulación y priorización de conflictos en la región Nororiente	7
El mapa de la conflictividad territorial en la Región Central	8
Los conflictos priorizados en la región central	8
El eje articulador de los procesos populares en el Centro: Agua	8
Ilustración 2. Articulación y priorización de conflictos en la región central.....	10
El mapa de la conflictividad territorial en la Región Caribe.....	11
Los conflictos priorizados en la región Caribe	11
El eje articulador de los procesos populares en el Caribe: Territorio, identidad y cultura	11
Ilustración 3. Articulación y priorización de conflictos en la región Caribe	13
El mapa de la conflictividad territorial Los conflictos en la Región Suroccidente ..	14
Los conflictos priorizados en la región Suroccidente	14
El eje articulador de los procesos populares en el Suroccidente: Territorio y cultura	14
Ilustración 4. Articulación y priorización de conflictos en la región Suroccidente	15
PRIORIZACIÓN Y EJES DE ARTICULACIÓN	18
Diagrama de Conflictos comunes a nivel nacional	19
El Desarrollo Rural como un elemento de trabajo importante en el camino de construcción de propuestas de paz	21
Construcción de paz y negociación	23
¿Desde dónde y cómo entender el tema de Políticas Públicas Populares?	24
El lugar de las organizaciones sociales populares: la construcción de paz desde sus saberes y acciones Lo popular como un escenario en disputa.....	27
Incidencia de las organizaciones sociales populares a través de propuestas de política pública popular.....	29
Para la sistematización, formulación y cualificación de políticas públicas populares proponemos tener en cuenta como referentes los siguientes puntos iniciales:	30

El trabajo realizado en el Observatorio Nacional de Paz ONP con 319 organizaciones sociales populares del país, ha permitido avanzar en un ejercicio de identificación, caracterización y priorización de los conflictos.

Durante el primer año se identificaron 1082 conflictos que se clasificaron en torno a 14 dimensiones de análisis, posteriormente durante el segundo año se realizó un ejercicio de priorización nacional que arrojó un total de 64 conflictos priorizados a nivel nacional.

En este documento se puede apreciar el proceso de identificación y priorización de conflictos del ONP.

Esta publicación ha sido producida gracias al apoyo de la Unión Europea, el Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, la Fundación Hanns Seidel-Stiftung y FOS Colombia bajo los términos y acuerdos de cooperación.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan el punto de vista de los cooperantes.



UNIÓN EUROPEA



Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega



Hanns
Seidel
Stiftung

Organizaciones socias del ONP



PLANETA PAZ

